

Santiago, cuatro de julio de dos mil veinticinco.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**Primero:** Que en este procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios solicitada de conformidad al artículo 669 del Código Civil conocido por el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar bajo el rol C-3363-2020, caratulado “López con López”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por el demandado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, confirmó el fallo de primer grado que acogió la demanda declarando que el demandado deberá pagar al actor \$44.489.638.- por el valor de lo edificado por éste en el predio del primero, más reajustes e intereses.

**Segundo:** Que el recurrente de nulidad afirma que en la sentencia cuestionada se infringe lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil, en relación al 341, 411 y 425 del Código de Procedimiento Civil ha concedido fuerza probatoria al informe pericial evacuado en el proceso por el que se tuvo por acreditado el valor de lo construido, fijado en la suma de \$44.489.638, en base a una fundamentación insuficiente y antojadiza. Por otra parte, sostiene que la demandante no demostró que fue él quien soportó los costos de la construcción pues de las facturas de compra y la testimonial aparece que parte de los gastos los solventó su cónyuge quien no demandó.

Por otro lado, alega que al acoger la demanda se han transgredido los artículos 669, 1578 y 1576 del Código Civil pues dichas normas no admiten que habiéndose edificado entre más de una persona, sea solo uno de ellos edificadores el que accione judicialmente y reciba en la sentencia la declaración de que se le pague el total del valor del edificio, más si en el juicio mismo no se ha acreditado que parte de ese valor le corresponde a uno y a otro.

**Tercero:** Que, al contrastar lo decidido con el tenor del recurso, queda de manifiesto que las alegaciones del impugnante persiguen desvirtuar los supuestos fácticos fundamentales fijados por los sentenciadores, esto es, que la parte demandada es dueña del inmueble ubicado en calle Javiera Carrera N°299 esquina Manuel Montt, cerro Placeres, Valparaíso; que el actor, con materiales propios y con conocimiento del demandado, realizó una edificación dentro de dicho inmueble; que el demandado dedujo una acción de precario en contra de su hermano -demandante en estos autos- la que fue acogida por sentencia de 5 de febrero de 2020 lo que demuestra que el demandado quiere recobrar su terreno; y que el valor de lo construido por el demandante en el inmueble asciende a UF 1.280,13, esto es, \$44.489.638.-, concluyendo a partir de estos hechos que se reunían todos los presupuestos para acoger la demanda.

**Cuarto:** Que en este sentido resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y, efectuada correctamente dicha labor en atención al mérito de las probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba que han permitido establecer los presupuestos fácticos que vienen asentados en el fallo, lo que no acontece en el caso de autos.



En nada altera lo razonado en el párrafo que antecede la denuncia de infracción a lo previsto en el artículo 411 del Código de Procedimiento Civil el que solo regula un aspecto puramente formal relacionado con la procedencia del informe pericial mientras que el artículo 425 del mismo código solo será susceptible de ser revisada por la vía de casación en la medida que el juzgador en el análisis del material probatorio se aparte en forma notoria del examen reflexivo y concordante de las reglas de la sana crítica, lo que en el presente caso no se vislumbra que haya ocurrido. Tampoco se observa una transgresión al artículo 1698 del Código Civil pues dicha disposición solo es una regla general de nuestro derecho positivo relacionada con la distribución de la carga probatoria, misma que no se aprecia alterada. Finalmente el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil no es reguladora de la prueba en tanto contienen únicamente la enumeración de los medios de prueba que contempla la legislación procesal civil.

En definitiva, puede concluirse que los fundamentos del recurrente no apuntan propiamente a la valoración de los medios de prueba, sino que ataca la consecuencia jurídica a la que aquéllos arribaron a partir de los antecedentes allí contenidos, esto es, luego de haber realizado, en forma legal, el proceso de valoración exigible, situación esta última que no importa, de manera alguna, una conculcación a los preceptos aludidos.

**Quinto:** Que lo razonado lleva a concluir que el recurso de casación en el fondo no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Eduardo Arrate Menaré, en representación de la parte demandada, en contra de la sentencia de ocho de mayo de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese y devuélvase.

**Rol N° 21.268-2025**





Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Álvaro Rodrigo Vidal O. Santiago, cuatro de julio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a cuatro de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

